

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : Juzgado de Letras de Castro  
**CAUSA ROL** : C-1502-2021  
**CARATULADO** : ESPAÑA/BLUE SHELL S.A.

**Castro, veintiséis de Noviembre de dos mil veintidós**

**VISTOS:**

Que, con fecha 28 de septiembre de 2021, a folio 1, compareció doña **Maryori Yassel España Mansilla**, cedula nacional de identidad N° 19.399.619-1, doña **Yarissa Allin España Mansilla**, cedula nacional de identidad N° 20.234.180-2, y don **Vicente Manuel España Mansilla**, cedula nacional de identidad N° 21.402.766-6, mayores de edad, todos estudiantes, y domiciliados para estos efectos en calle Eduardo Provasoli N° 691 de la comuna de Castro, representados por el abogado don Ignacio Álvarez Vera, e interpusieron demanda de indemnización de perjuicios, en procedimiento ordinario de mayor cuantía, en contra de **Blue Shell S.A**, RUT: 99.589.870-5, del giro de su denominación, representada legalmente por don Juan Cristobal Salinas Larraín, cedula nacional de identidad N° 10.570.336-8, con domicilio de su casa Matriz en Calle Mardoqueo Fernández 128, Oficina 204, Providencia, Región Metropolitana, y su planta ubicada en camino a Teguel. Km. 1.2, de la comuna de Dalcahue, Región de los Lagos, solicitando que se condene a la demandada al pago de la suma de \$200.000.000, como indemnización por daño moral y la suma de \$ 227.432.016, a título de lucro cesante, todo con costas.

Fundaron su demanda señalando que son hijos de don Fredy Eladio España Cárdenas, cedula nacional de identidad N° 11.717.496-4, quien falleció mientras prestaba servicios para la demandada BLUE SHELL S.A, ubicada en camino a Teguel. Km. 1.2, de la comuna de Dalcahue, Región de los Lagos.

Expusieron, que su padre don Fredy España, el día 22 de noviembre de 2018, fue a cumplir con su jornada de trabajo, como lo hacía de forma habitual, y a las 12:10 horas, aproximadamente, mientras trabajaba en el área de planta de harina, y realizaba instalación de ductos de extracción de vapores, sobre un canastillo alza hombre hechizo, a una altura de 5 metros elevados por una grúa horquilla, al finalizar la instalación y justo cuando solicita al yalero que lo baje, ya que había terminado su trabajo, la grúa retrocede generando un golpe y apriete de la víctima, contra la estructura del cielo raso (termo panel) y el canastillo alza hombre; de inmediato se da aviso a la unidad de emergencia, siendo trasladado en ambulancia al Centro de Salud de Dalcahue, donde fallece.

Luego, señalaron que se inició preliminarmente fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, con fecha de informe 05 de diciembre de 2018, la cual lo calificó como accidente



de trabajo, habiendo constatado diversas deficiencias, actuaciones y omisiones, que conllevaron directamente al fatídico acontecimiento. Entre las deficiencias que fueron constatadas por el organismo administrativo, se pudo encontrar; factores asociados al medio, condiciones estructurales y deficiencias de vías de desplazamiento, condiciones de riesgos en el espacio de trabajo.

Indicaron que, conforme al historial de fiscalizaciones y sanciones en los últimos doce meses, a través del sistema DTPLUS constató que la demandada tiene; 01 fiscalización con multa, 04 fiscalizaciones sin multa, 05 reclamos administrativos, todo lo cual denota un accionar negligente en materia de higiene y seguridad por parte de la demandada. La fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo se ve complementada por la realizada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la que en el mismo día y momento del accidente laboral se encontraban realizando fiscalización de calderas, por lo que pudieron conocer de modo directo e inmediato lo ocurrido, aplicando una multa de 1.000 UTM a la empresa incumplidora por las infracciones cometidas y constatadas, de manera inmediata y personal por los funcionarios que, justamente, se encontraban en el lugar.

Agregaron que, de la declaración expresamente señalada en el numeral 7 del referido informe, correspondiente a la Individualización de testigos, entrevistas y síntesis de sus declaraciones, específicamente en la declaración de Raúl Bórquez Aguilar, quien es operador de grúa horquilla, de dichas afirmaciones hechas por el testigo evidencian un cúmulo de deficiencias adicionales que pudieron haber provocado el fatal accidente, entre ellas: gestión preventiva de la empresa; actividades preventivas en desempeños de alto riesgo como el que nos ocupa; factores de la organización del trabajo; procedimientos de trabajo; formación; capacitación e información sobre el uso de equipos y maquinarias; factores asociados al medio; adecuada visibilidad.

Enfatizaron que, este cúmulo de deficiencias en el sistema de prevención, higiene y seguridad por parte de la demandada, ocasionaron la muerte a su padre, al sufrir con ocasión de ese terrible accidente un Traumatismo Toraco-Abdominal Cerrado, que le provocó la muerte por Shock Hipovolémico; siendo ésta muerte absurda y dolorosa, toda vez que se trataba de un hombre joven, fuerte, excelente padre, principal proveedor y sustento de su grupo familiar, un trabajador responsable y comprometido con su desempeño laboral, lo cual le hizo ascender en cargos durante su trayectoria en su puesto de trabajo.

Afirmaron que, todo lo ocurrido a su padre los deja en una grave situación económica, ya que serían los únicos herederos y se encuentran en edad escolar básica y universitaria, y por ello la terrible tragedia familiar los hace presumir que tienen que lidiar con el dolor de perder a su padre y con la incertidumbre de tal vez perder la posibilidad de tener en el futuro una vida digna, producto del trabajo y desempeño profesional, derivado de su esfuerzo y estudios universitarios, tal como su padre lo hubiese deseado.



En cuanto al derecho, primero refieren que comparecen en calidad de hijos de su padre fallecido, únicos herederos y por el perjuicio sufrido por ellos tres.

Respecto de la responsabilidad extracontractual de la demandada, destacan del informe realizado por la Seremi de Salud que *“..., en el caso en comento y de conformidad a los antecedentes ya citados, se observa que la empresa no cumplió con la supervisión adecuada para suprimir los factores de peligro que afectó la salud del trabajador Fredy Eladio España Cárdenas, causándole la muerte”*.

Invocaron como normas infringidas los artículos 66, 67, 68, 69 letra b) de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, artículos 184 y 210 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3 y 53, acápite 1° del D.S. N° 594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Hacen referencia al fallo rol corte 2547-2014, nuestra Excelentísima Corte.

Sostuvieron que, en cuanto a la procedencia de la indemnización del daño moral en sede civil se cumplirían los requisitos, estos son; 1) Acción u omisión; la acción de haber hecho trabajar a su padre en una labor que no le correspondía, y omisión de no adoptar ni proveer las medidas de seguridad necesarias para evitar fatales accidentes como el descrito en autos; 2) Capacidad extracontractual de la demandada; Las personas jurídicas de derecho privado, aunque eventualmente incapaces de delito y cuasidelito penal, son capaces de delito y cuasidelito civil, están obligadas a indemnizar los daños que causaren, con dolo o culpa, las personas naturales que obren en su nombre o representación o que se encuentren bajo su dependencia o servicio; 3) La no existencia de una causa legal de exención de responsabilidad; ni en la ley ni en el contrato existen cláusulas de exención de responsabilidad que amparen el actuar culpable de la demandada, cuestión imposible de suscitarse ya que debemos recordar que en este caso estamos ante la presencia de derechos irrenunciables; 4) La relación de causalidad; el fallecimiento de su padre que les origina el daño, se produjo debido al accidente sufrido mientras su padre trabajaba para la empresa demandada bajo una total vulneración por parte de ella, de las normas y medidas de Higiene y Seguridad necesarias para prever accidentes; 5) El daño; que en este caso corresponde tanto a un daño material como asimismo un daño moral, debido al fallecimiento de un ser querido.

En cuando al daño moral, se adscriben al pensamiento de doña Carmen Domínguez y su libro “El Daño Moral”, que la tesis del daño moral como “pretium doloris” ha sido superada y el daño moral hoy es algo más que “todo detrimento o menoscabo que una persona experimenta por hecho o culpa de otro, ya sea en sus bienes o en cualquiera de sus derechos “extrapatrimoniales”, y en este caso, como consecuencia del grave incumplimiento de obligaciones de la parte demandada, se ha generado un enorme daño moral atribuible a esta, y con mayor razón en su caso se debe tener por acreditado este punto ante el evidente dolor



sufrido, la impotencia y la desesperación por este concepto, atendido la gravedad del accidente sufrido por su padre don Fredy España que le costaron la vida, muriendo trágicamente, por lo mismo demandan una indemnización por la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos).

Adicionalmente, demandaron lucro cesante, considerando para ello la edad de los suscritos, y que de todas las remuneraciones que habría percibido su padre fallecido, hasta su jubilación, de no haber sufrido el accidente de trabajo imputable a la demandada, y de todos los hechos contenidos en esta demanda avalúan en la suma de \$227.432.016, considerando la expectativa de trabajo hasta los 65 años de edad y la remuneración recibida por su padre en el mes de octubre previo a su muerte.

Hicieron presente, finalmente que la empresa demandada fue condenada, por fallo firme o ejecutoriado, en sede Laboral por la suma de \$60.000.000, a título de daño moral, por el dolor ocasionado al propio trabajador víctima del hecho.

Pidieron en definitiva que, se tenga por deducida demanda en juicio ordinario de mayor cuantía por indemnización de perjuicios, en contra de la empresa BLUE SHELL S.A., representada legalmente por don Juan Cristóbal Salinas Larraín, y en definitiva condenar a la demandada al pago de una indemnización por daño moral y lucro cesante, en las sumas solicitadas, o lo que el tribunal determine en definitiva, con costas.

El **16 de noviembre de 2021**, a **folio 8**, consta se notificó de conformidad a lo establecido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil la demandada y su proveído a don Juan Cristóbal Salinas Larraín, en representación de la demandada BLUE SHELL S.A.

El **19 de enero de 2022**, a **folio 16**, compareció el abogado don Gustavo Muñoz Basáez, en representación de la parte demandada Blue Shell S.A., contestando la demanda incoada en su contra, solicitando sea rechazada en todas sus partes con expresa condena en costas, por los argumentos que se exponen en síntesis.

Manifestó que, respecto de la investigación de la Inspección el Trabajo, quien califico el accidente como laboral, su representada no fue notificada ni tomó conocimiento legalmente en su oportunidad, deslegitimando por ilicitud funcional dicho acto administrativo.

Expuso que, los demandantes habrían constatado en el sistema de la Dirección del Trabajo (DTPLUS) que la demandada tuvo otras fiscalizaciones que no guardan relación con la materia civil reclamada en autos, y que por lo demás para los efectos de dicho servicio, es una información reservada que está protegida por la Ley 19.628 y de la cual, los actores señalan como si fuera publica lo cual desde ya se indica como obtenida de forma ilegal. Adicionalmente describen que hubo una investigación por parte de la SEREMI de Salud Regional la cual, según sus dichos aplicó una multa de 1.000 UTM y de cuyo informe extrae que, Raúl Bórquez declaró lo que en la demanda se consigna. Que, el sumario administrativo, al cual se refiere el actor, ha sido afecto a reclamación judicial en sede civil ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt, en los autos rol C-1093-2019, caratulados Blue



Shell con Secretaria Regional, proceso en el cual, reclamada la intervención y fallo del Tribunal Constitucional, este declaró como inconstitucionales en su totalidad los preceptos normativos contenidos en los artículos 163, 166, 167, y 174 del Código Sanitario, conforme con los cuales se instruyó y se dictó el fallo del sumario administrativo, es decir, ese procedimiento administrativo fue declarado en su origen, en su forma y en su contenido como inconstitucional según consta de la sentencia 8823-2020 de fecha 21 de diciembre de 2020 del Exc. Tribunal Constitucional. En ese mismo sumario administrativo cita el actor la declaración en ese proceso administrativo del operador (exoperador) de la grúa horquilla, Raúl Borquez Aguilar, pero sin señalar al tribunal que esta persona fue procesada por cuasidelito de homicidio en la persona del padre de los demandantes, don Fredy España, y que la investigación penal concluye, por medio de la brigada de homicidios de puerto Montt que, el accidente en el que se dio muerte al Sr. España se estableció por esa entidad investigadora “responsabilidad en el operador Raúl Humberto Borquez Aguilar, ya que tuvo un actuar negligente al momento de realizar su trabajo” y que este delito fue perseguido penalmente ante el Juzgado de Garantía de Castro en los Rit Ordinarios 2651-2018, y carpeta investigativa causa ruc 1810053519-6.

Afirmó que, los actores nada dicen en cuanto a que su padre fallecido ya no vivía con ellos, que a la fecha del accidente sostenía una relación con doña Carol Mena Valencia, y como asimismo sostuvo otras relaciones de las cuales nacieron otros hijos que no son parte de esta acción, que los actores se presentan como los únicos herederos de don Fredy Eladio España Cárdenas, cuando ello no es verdad.

Añadió que, no existen más hechos relatados como sustento de la acción, que la réplica y cita a la jurisprudencia que copia fraccionadamente en el libelo, no se concatenan con los hechos relatados, solo determinan en su contexto que su padre falleció en circunstancias que se indican en o dentro de la relación laboral y que los actores son sus hijos, y que la responsabilidad que se reclama (por extracontractual) proviene del incumplimiento de las normas laborales que relata, e imputa un “accionar negligente en materia de higiene y seguridad por parte de la demandada”, lo cual sería falso, y replica como incumplidas las normas de los artículos 184 y 210 del Código del Trabajo, y correlaciona con la Ley N° 16.744, y Decretos Supremos, todos ellos de naturaleza laboral.

Esgrimió que, en cuanto a la procedencia del daño moral existiría confusión de la demandante respecto al tipo de acción que promueve, por cuanto al referirse a la jurisprudencia administrativa, lo hace respecto de los Dictámenes de la Dirección del Trabajo, jurisprudencia que dice relación con cuestiones derivadas de una acción que dice relación con la sede contractual laboral, y no de una acción civil en sede contractual.

Mencionó que, al señalarse los requisitos de la responsabilidad extracontractual en la demanda, en cuanto a "*la acción u omisión*", el hecho consignado no es efectivo, toda vez que, la función que cumplía el fallecido ex trabajador sí le correspondía, como así mismo,



se adoptaron todas las medidas de seguridad existentes a la fecha del accidente. En cuanto a *“la capacidad extracontractual de la demandada”*, dice que su contraria pretende resolver la responsabilidad civil extracontractual sin explicar de modo alguno el cómo una persona jurídica, por sí misma como entidad ficticia, tiene la capacidad delictual o cuasi delictual civil, por cuanto describe más arriba que fue la demandada Blue Shell la que obligó a trabajar a su padre en una labor que no le correspondía, entre este numeral "capacidad" y el anterior "acción u omisión" no existe de modo alguna una concatenación clara y cierta de como una persona jurídica es capaz de obrar por sí como entidad individual de los socios que la constituyen con dolo o con culpa, pero si le otorga capacidad extracontractual, para luego reiterar en el numeral siguiente que el actuar culpable es de su representada. En cuanto a *“la no existencia de una causa legal de exención de responsabilidad”*, la alegación de la parte demandante es que reclama responsabilidad extracontractual, sin embargo consigna para justificar este requisito que “ni en la ley ni en el contrato existen cláusulas de exención de responsabilidad que amparen el actuar culpable de la demandada”, sin embargo, en la ley si hay causales de exención de responsabilidad, y complementa este desconcierto jurídico que “en este caso estamos ante la presencia de derechos irrenunciables” lo cual solo aplica en sede laboral, cuando la responsabilidad reclamada es la contractual y no la extracontractual como ha descrito en su demanda la parte actora. Sobre *“la relación de causalidad”*, indicó que su contraria expresa que es el fallecimiento de su padre el que produce u origina el daño, pero no señala ni describe cual es el daño real y efectivo, y no meramente presuntivo que se reclama, obviando que la muerte del padre (que no es el hecho dañoso reclamado), fue provocado por el actuar de un trabajador de la empresa procesado por cuasidelito de homicidio, el cual hasta les pidió disculpa a los comparecientes en sede penal. En lo relativo *“al daño”*, los demandantes solo se limitarían a decir que este es material y moral, pero no indican cuál es cada uno de ello, y para justificar el daño moral señalan que adscriben a la teoría de doña Carmen Domínguez, superando la teoría de “pretium doloris” y que incluso hay daño moral en el incumplimiento de los contratos, pero no describen ni detallan en que consiste el daño moral como hecho concreto e imperativo, relatado como obligación procesal incumplida, los hechos reales y efectivos que sustenten su causa de pedir (de la acción y/o demanda), pues nada dicen, en cuanto a la causa de la indemnización que reclama el dolor y la perdida reclamada.

Por otra parte, dijo que el sustento de la acción y pretensión del daño moral son los mismos consignados en el texto de la demanda laboral seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, en los autos Rit O-73-2019, y que no cabe duda que en este pleito Civil y en aquel (laboral) los actores han hecho uso y abuso del derecho sustentando ambas acciones en los mismos hechos con las mismas pretensiones, y sin siquiera, al menos ajustar su acción.



Posteriormente, como defensa, opuso primero excepción perentoria de incompetencia absoluta y relativa, reiterando para estos efectos que el Juzgado de Letras en lo Civil de Castro es territorialmente incompetente, debiendo conocer de este asunto el tribunal de letras en lo civil con competencia en la Jurisdicción de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, por cuanto su representada tiene un único domicilio en la comuna de Providencia, de la Región Metropolitana.

Luego, reclamó la incompetencia absoluta del tribunal, fundado en que los demandantes interpusieron la presente acción de indemnización de perjuicios y “por accidente del trabajo” relatando una serie de acontecimientos ligados a un proceso judicial afinado en sede judicial laboral, autos Rit O-73-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, citando actuaciones de la Dirección del Trabajo y de la Seremi de Salud Regional de Los Lagos, los artículos 66, 67, 68 y 69 letra b) de la Ley N° 16.744, conforme con la cual describen que se podrá demandar por daño moral, y el artículo 210 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3 y 53, acápite 1° del D.S. N° 594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, de tal forma que de la cita hecha por los actores de aquella legislación, el conocimiento queda en manos del juez de esa jurisdicción especial, conforme a lo previsto en el artículo 420 letra f) del Código del Trabajo.

Interpuso además, excepción perentoria de cosa juzgada, fundado en que entre el presente proceso civil y la causa Rit O-73-2019 seguida ante el Juzgado del Trabajo de Castro, donde ya existe sentencia que está firme y ejecutoriada, y cumplida, se darían los prepuestos de la triple identidad contenidos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es; igual identidad de las partes, igual identidad de la cosa pedida e igual identidad de la causa de pedir.

En seguida, alegó la ausencia de los elementos de hecho por la responsabilidad reclamada, que el Código Civil adscribe por su texto a la responsabilidad subjetiva, y no existe responsabilidad imputable por dolo o malicia a la demandada. En el caso de marras, afirma no existe explicación del dolor causado, no se indica en qué consistía, cómo se produjo, así como también cuáles son las consecuencias de ese dolor que fue provocado por el supuesto hecho dañoso, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil la parte demandante debe probar los siguientes elementos, a fin de determinar la responsabilidad civil extracontractual: 1) Existencia de daño en la persona o bienes de la víctima (puede ser moral o patrimonial) entendiendo que, las víctimas en este caso son los actores; 2) Que el daño sea un efecto directo de una acción u omisión voluntaria del autor, que el autor haya actuado con dolo o culpa, esto es que Blue Shell haya obrado con dolo o malicia; 3) La relación causal entre la actividad de Blue Shell y del daño provocado a la víctima. La prueba en el nexo causal entre el hecho dañoso y el efecto de dicho acto, debe recaer en el actuar doloso y/o culpable, comprobando la actividad delictual o cuasi delictual de Blue Shell S.A.



Por otra parte, afirmó que al ser la demandada una empresa, o persona jurídica de derecho privado, por especial aplicación del artículo 545 del Código Civil, como también el artículo 551, al ser una entidad ficticia, por la actividad de esta entidad no es posible detentar una actividad dolosa o culpable, sino en cuanto a las personas naturales que la representan en la vida del derecho, y nada de eso se ha expuesto en la demanda.

Sostuvo, que no existe responsabilidad de la persona jurídica demandada como se plantea en este caso de autos, por cuanto el artículo 552 Código Civil, en relación con el artículo 2079, niegan la posibilidad de existir la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas, siempre que un representante de la persona jurídica comete un delito o cuasidelito civil, y por ende, la persona natural que represente a esta entidad ficta, solo ella es responsable, y la víctima o quien dice tener tal calidad, no podrá perseguir la indemnización en el patrimonio de la persona jurídica respectiva, incluso bajo la normativa del mandato establecido en el artículo 2160 del Código Civil, por cuanto la responsabilidad extracontractual en nuestro derecho civil es personal según lo dispuesto en el artículo 2316 del Código Civil, y sólo por excepción se responde por el hecho ajeno. Indicó que, para fundar la responsabilidad del ente ficto Blue Shell S.A, se debió tratar de fundar la acción del actor en la responsabilidad patronal que le cabe a la entidad ficta contenida en los artículos 2320 a 2322 del Código Civil, aplicando las presunciones de responsabilidad por el hecho ajeno y en especial la responsabilidad que le compete a los empresarios por el hecho de sus aprendices o dependientes, lo que no es efectivo, pues no ha sido alegado como tampoco consta en el proceso que tal norma es la que incide o causa la presente acción menos la pretensión. Citó al efecto, la teoría de la representación y la teoría del órgano, relacionándolo con el artículo 550 del Código Civil.

Hizo presente que, al tenor expreso de la demanda, no hacen posible el recurrir a la presunción de responsabilidad por el hecho del dependiente, conforme lo prescriben los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, ello por cuanto, el actor limitó la responsabilidad material reclamada en normas del derecho laboral contenidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y la Ley 16.744, ambas aplicables al estatuto de responsabilidad contractual, que en esta sede civil por normas de competencia las hacen incompatible e inaplicables a la acción y por la responsabilidad civil extracontractual reclamada.

Razonó que, hay ineffectividad de los hechos relatados por y para la responsabilidad reclamada, porque el hecho que, sin ser reclamado como dañoso, provocó la muerte del padre de los actores, no proviene ni de dolo ni de malicia de Blue Shell S.A., sino que este provino de una mala maniobra dada por el Sr. Raúl Borquez. La causa basal del accidente mismo, la actora la centra en un incumplimiento al deber de cuidado regulado en y para la responsabilidad contractual ya debatido y sentenciado en sede laboral, y no a la causa real y efectiva del accidente, cual es la mala maniobra realizada por el “Yalero” Sr. Raúl Bórquez.





Argumentó, respecto del lucro cesante demandado, que los actores describen que el fallecido trabajador, pudiera haber trabajado hasta los 65 años, y la merma eventual económica sería de \$227.432.016, considerando la última remuneración que percibió en el mes de octubre del año 2018, con una remuneración de \$1.052.926, según contrato, lo cual no es efectivo ya que la remuneración real del trabajador en ese último mes fue de solo \$956.341, conforme con el artículo 172 del Código del Trabajo. Que, el lucro cesante no sería de ellos como víctimas, sino del padre como trabajador, es decir, una prestación que deriva de la responsabilidad contractual, dicha pretensión es de carácter patrimonial y contractual laboral, y no civil de responsabilidad extracontractual, provocando con esto un cumulo de contradicciones de estatutos que regulan la materia demandada.

Añadió por otra parte, que existiría intransmisibilidad de la acción a los herederos de un trabajador, en razón de los hechos y causal establecidos en el texto de la demanda por la indemnización que se reclama en autos, por cuanto en la forma como fue propuesta la acción es intransmisible, por considerarlo así el artículo 69 letra b) y 88 ambos de la Ley 16.744, y porque la responsabilidad que se persigue, es extracontractual y no la responsabilidad contractual que se determina por competencia el artículo 420 letra f) del Código del Trabajo. Indicó, que según el artículo 19 inciso 1° del Código Civil, el artículo 69 letra b) de la Ley 16.744, en franca correlación con lo que dispone el artículo 88 del mismo texto legal, la legitimación activa de la acción resarcitoria sustentada en esta norma, como ocurre con esta demanda, queda reservada en la persona misma de la víctima, quien por ley es la que puede reclamar, en este caso del accidente laboral, y podrá hacerlo, o en la persona del verdadero responsable como lo fue el Sr. Borquez, o bien, a su empleador, cuando dicha responsabilidad -delictual o cuasi delictual- recae en él, lo que reitera, ya ocurrió en los autos Rit O-73-2019 seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, por ello la responsabilidad civil extracontractual sostenida por los actores, fundados en la Ley 16.744, provoca que todos ellos carezcan de legitimación activa en esta sede civil. Adicionó que, los demandantes son hijos del fallecido trabajador, quienes reclaman daño moral como víctimas, por rebote o reflejo, por el accidente sufrido por su padre, en el cual perdió la vida, siendo herederos del causante, sosteniendo que el artículo 184 del Código del Trabajo y la Ley 16.744 en su artículo 69, le dan la posibilidad de requerir en estos estrados civiles, el poder demandar por daño moral, no en razón del accidente sufrido por el padre, porque nada de eso dicen en la demanda, sino por ser hijos del fallecido trabajador.

Enfatizó que, en los presentes autos, existe falta de legitimación pasiva de la parte demandada, por la incapacidad de las personas jurídicas de cometer delitos o cuasidelitos, por cuanto serían los órganos y/o sus representantes quienes lo harían por ella, aplicando la teoría del exceso de mandato y la del órgano. Además, por expresa disposición de la Ley, el obligado a indemnizar es aquel que *“ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro”*, pues bien, Blue Shell no ha cometido ningún ilícito civil, ni delito ni cuasi



delito civil, quien sí lo cometió fue el Sr. Borquez a quien el artículo 2314 del Código Civil le impone la obligación de indemnizar, por ser él quien causó por su actuar negligente imprudente y temerario el accidente, no estando en la hipótesis del artículo 2317 del Código Civil.

Culminó señalando que, en cuanto a la responsabilidad por repercusión, los demandantes no han indicado de modo alguno en su demanda, hechos que sostengan cuál es el hecho dañoso de ellos, cual es el nexo de causalidad entre este hecho, omitido, como tampoco reseñan el hecho que sería o constituiría, el perjuicio que tampoco se señala en la demanda, ni el hecho de que su representada supuestamente le ha causado el daño.

Finalizó solicitando, se tenga por evacuado en tiempo y en forma, el traslado conferido para el trámite de la contestación de la demanda.

El **26 de enero de 2022**, a **folio 20 del cuaderno principal**, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reproduciendo en todas sus partes lo señalado en su demanda.

El **04 de febrero de 2022**, a **folio 22 del cuaderno principal**, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, ratificando todo lo señalado en la contestación de la demanda.

El **14 de marzo de 2022**, a **folio 27 del cuaderno principal**, se llevó a cabo la audiencia de conciliación con la sola asistencia de la abogada de la parte demandada, y en rebeldía de la parte demandante, por lo que ésta no se produjo.

El **16 de marzo de 2022**, a **folio 29 del cuaderno principal**, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que ésta debía recaer.

El **08 de junio de 2022**, a **folio 78 del cuaderno principal**, se citó a las partes a oír sentencia. Luego, con fecha 22 de agosto de 2022, a folio 79, se decretó como medida para mejor resolver traer a la vista la causa laboral Rit O-73-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, caratulada “España con Blue Shell S.A.”, incluyendo la eventual causa de cumplimiento en cobranza laboral. Ulteriormente, con fecha 13 de septiembre de 2022, a folio 82, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver.

El **13 de septiembre de 2022**, a **folio 83 del cuaderno principal**, y con el objeto de contar con los antecedentes relevantes para la adecuada resolución de la causa, se decretó como medida para mejor resolver oficiar a la institución Previred a fin de que remitan toda la documentación con la que cuenten respecto del pago de cotizaciones previsionales obligatorias que tuvieran los demandantes de autos.

El **25 de noviembre de 2022**, a **folio 95 del cuaderno principal**, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver, reanudándose la citación a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**I.- EN CUANTO A LAS TACHAS FORMULADAS A LOS TESTIGOS DE LA PARTE DEMANDADA:**



**PRIMERO:** Que en la audiencia testimonial, de fecha 07 de abril de 2022, la parte demandante tachó a los testigos de la parte demandada, don Abel Patricio Levi Manquicheo y don Aladino Raúl Venegas González, ambos en virtud de la causal del N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la que corresponde a “*la falta de imparcialidad de los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio*”, señalando que de las declaraciones de los testigos queda de manifiesto que ellos tienen una relación laboral que los une con la empresa demandada Blue Shell, quien los presenta en este juicio, tienen un contrato de trabajo vigente, se encuentran sometido vinculo de bajo la subordinación y dependencia, configurándose en ese sentido la tacha interpuesta.

**SEGUNDO:** Que se confirió traslado a la parte demandada, y su abogado señaló que no obstante ser una causal objetiva, la consagrada en el N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, los únicos testigos que podrían declarar son aquellos que vieron, presenciaron, percibieron los hechos, son los dos testigos que presentan en ese momento, por lo tanto, insistió en que pudieran deponer. En cuanto al segundo testigo agregó que el hecho que sea dependiente de la empresa demandada, no necesariamente va a determinar la imparcialidad o la parcialidad, por el contrario cree que su testigo es parcial, ha respondido a la última pregunta que ha hecho la demandante en cuanto al interés en el pleito, claramente manifiesta no tenerlo.

**TERCERO:** Que, a efectos de resolver la presente incidencia, será del caso considerar el claro tenor de las declaraciones de ambos testigos de la parte demandada, quienes reconocieron expresamente la calidad de trabajadores dependientes de la parte demandada, empresa Blue Shell S.A, aquella que los presentó en juicio y quien les solicito que comparecieran a declarar, asimismo ambos trabajadores reconocieron tener contratos de trabajos vigentes con la demandada, tanto el día de los hechos invocados en la demanda, como al momento de prestar sus declaraciones, y que se encuentran sometidos bajo vinculo de subordinación y dependencia con la demandada.

A mayor abundamiento, en la presente incidencia concurren los tres elementos que son necesarios para estimar configurada la causal N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es; *la dependencia*, al encontrarse ambos testigos bajo un vínculo de subordinación y dependencia con la demandada, con contratos de trabajo vigentes, siendo una dependencia contemporánea; *la habitualidad*, por encontrarse ambos testigos el día de los hechos y al momento de prestar sus declaraciones con contratos de trabajos vigentes; y *la retribución*, porque ambos testigos recibirían remuneraciones al ser trabajadores dependientes de la parte demandada.

En conclusión, de acuerdo a las declaraciones proporcionadas por ambos testigos de la parte demandada, en la especie se configura la inhabilidad consagrada en el N° 5 del



artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual la tachada fundada en tal disposición deberá ser acogida.

**II.- EN CUANTO AL FONDO:**

**CUARTO:** Que conforme a lo expuesto durante el período de discusión, los actores pretenden se condene a la demandada a pagarles la suma de \$200.000.000 por daño moral, y \$227.432.016 a título de lucro cesante, por la responsabilidad extracontractual que le correspondería, por el fallecimiento de su padre don Fredy Eladio España Cárdenas, mientras prestaba servicios para la demandada BLUE SHELL S.A, ubicada en camino a Teguel. Km. 1.2, de la comuna de Dalcahue, Región de los Lagos, por los hechos descritos en lo expositivo de este fallo; todo ello con expresa condena en costas.

**QUINTO:** Que la demandada a su vez, contestó la demanda solicitando su completo rechazo, con costas, negando el relato de los hechos realizado por los actores; argumentado primero la incompetencia relativa y absoluta del tribunal, excepción perentoria de cosa juzgada; ausencia de los elementos de hecho por la responsabilidad que se reclama; que no existe responsabilidad imputable por dolo o malicia; que no existe responsabilidad de la persona jurídica; la ineffectividad de los hechos relatados por y para la responsabilidad que se reclamó; la intransmisibilidad de la acción a los herederos de un trabajador en razón de los hechos; la falta de legitimación activa y pasiva; y por último falta del daño por repercusión, en definitiva que no existe responsabilidad extracontractual de su parte.

**SEXTO:** Que, con el objeto de acreditar los fundamentos de su pretensión, la parte demandante rindió en la causa, las siguientes probanzas:

**I.- Documental:**

A **folio 36**, con fecha **23 de marzo de 2022**, instrumental consistente en:

1. Certificado de defunción de don Fredy España Cárdenas.
2. Certificado de nacimiento de los demandantes: Maryori España Mansilla, Yarissa Allin España Mansilla, y Vicente Manuel España Mansilla.
3. Certificado de posesión efectiva Folio 00011389283, número inscripción 37 del año 2019.
4. Autopsia de don Fredy Eladio España Cárdenas realizada por el Servicio Médico Legal.
5. Resolución N° 1910164 del 22 de febrero de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos.
6. Sentencia del Juzgado de Letras de Trabajo de Castro de fecha 21 de Junio de 2019.

**Oficios:**

1.- Respuesta oficio de Coordinadora Clínica Escolar de Castro, modulo dental, de fecha 01 de abril de 2022, agregado a folio 59.



**SÉPTIMO:** Que, a fin de acreditar sus dichos, la parte demandada rindió las siguientes pruebas:

I.- Documental:

A folios 57, con fecha **08 de abril de 2022**, instrumental consistente en:

1. Copia de demanda laboral deducida por la parte demandante en los autos Rit O-73-2019 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y su correspondiente certificado de ingreso.
2. Ebook causa rol C-1093-2020 llevado ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt, por reclamación judicial de multa por Sumario Sanitario por causa de accidente laboral de Fredy España.
3. Sentencia del Exc. Tribunal Constitucional, autos Rol 8823-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, que declara Inconstitucional la aplicación de los preceptos legales de los artículos 163, 166, 167 y 174 del Código Sanitario, para ser aplicado en la causa “Blue Shell S.A. con Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos”, Rol C-1093-2020 sustanciado ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt.
4. Ebook causa Rol C-1714-2020 llevado ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt, por cobro de multa administrativa dictada en el sumario sanitario por causa del accidente laboral de Freddy España, de la cual consta las excepciones opuestas y sentencia del Tribunal Constitucional.
5. Sentencia del Exc. Tribunal Constitucional de fecha 25 de noviembre de 2021, de los autos rol 10383-2021, que declara Inconstitucional la aplicación de los preceptos legales de los artículos 163, 166, 167 y 174 del Código Sanitario, para ser aplicado en la causa “Blue Shell S.A. con Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos”, rol C-1714-2021 sustanciado ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt.
6. Copia de la carpeta investigativa de los autos ruc 1810053519-3 seguidos ante la Fiscalía Local de Castro, en razón de la investigación del cuasidelito de homicidio y en la cual se tuvo por víctima al fallecido don Freddy España Cárdenas, y por victimario a don Raúl Bórquez Aguilar. En esta se da por causa de muerte del Sr. España, según la Policía de investigaciones de Chile a la maniobra hecha por el victimario Sr. Bórquez.
7. Copia del acta de la audiencia de acuerdo reparatorio de los autos Rit 2651-2018 seguidos ante el Juzgado de Garantía de Castro, de fecha 7 de agosto del año 2019, en la cual el victimario Raúl Bórquez Aguilar, imputado, otorga disculpas públicas en ese acto a las víctimas indirectas presente en la audiencia.
8. Escrito de reposición de multa de fecha 28 de febrero de 2019.



9. Documento titulado “Trabajo seguro en área de mantención” con fecha de revisión 27 de julio del año 2018, elaborado en el año 2015, y puesto en práctica desde esa misma fecha.
10. Documento titulado “Trabajo seguro, operación de grúas horquillas” con fecha de revisión 15 de noviembre del año 2018, elaborado en el año 2013, y puesto en práctica desde esa misma fecha.
11. Documento titulado “Trabajo seguro, operación de grúas horquillas” con fecha de revisión 26 de abril del año 2018, elaborado el 20 de diciembre del año 2013, y puesto en práctica desde esa misma fecha.
12. Documento titulado “Procedimiento de trabajo en altura” con fecha de revisión 27 de julio del año 2018, elaborado el 29 de marzo del año 2016, y puesto en práctica desde esa misma fecha.
13. Documento titulado “Procedimiento de trabajo seguro en la recepción” elaborado con fecha 18 de enero del año 2016, y puesto en práctica desde esa misma fecha.
14. Documento titulado “Trabajo seguro en área de mantención” con fecha de revisión 27 de julio del año 2018, elaborado el 18 de enero del año 2016, y puesto en práctica desde esa misma fecha.
15. Documento titulado “Procedimiento de trabajo seguro en área patio” elaborado con fecha 18 de enero del año 2016, y puesto en práctica desde esa misma fecha.
16. Comprobante de asistencia charla “Procedimiento de Trabajo en área de mantención” de fecha 12 de septiembre de 2016, en la cual estuvo presente el trabajador accidentado Freddy España.
17. Comprobante de asistencia charla “Trabajo en Altura” y “Manipulación tableros eléctricos /contacto eléctrico”, de fecha 13 de diciembre de 2017, en la cual estuvo presente el trabajador accidentado Freddy España, y descripción de contenido del curso.
18. Comprobante de asistencia charla “Procedimiento accidente del trabajo”, y material entregado en la charla, de fecha 14 de noviembre de 2016, en la cual estuvo presente el trabajador accidentado Freddy España.
19. Comprobante de asistencia charla “Capacitación seguridad en caso de amoníaco”, “capacitación seguridad en trabajos de mantención”, de fecha 27 de agosto de 2018, en la cual estuvo presente el trabajador accidentado Freddy España, y contenido del curso.
20. Informe técnico de la ACHS, de fecha 13 de diciembre de 2018, estableciendo la causa del accidente.
21. Cuatro declaraciones de testigos a la fecha del accidente.
22. Informe de investigación de comité paritario por el accidente.



23. Informe de investigación del Departamento de Prevención de Riesgos.
24. Anexo de contrato de trabajo del accidentado trabajador don Freddy España, y el cual señala y refiere que él era el supervisor de mantención.
25. Contrato trabajo de Raúl Bórquez Aguilar de fecha 18 de noviembre de 2014, y anexo de contrato de fecha 1 de febrero de 2015 se modifica cargo a “Operador de Grúa Horquilla” y descriptor de cargo suscrito por el actor.
26. Copia de Licencia de Conducir Profesional clases B y D, del señor Raúl Bórquez Aguilar, emitida con fecha 25 de julio de 2017, emitida por la I. Municipalidad de Castro.
27. Cuatro copias de diplomas por participación de Raúl Bórquez Aguilar en cursos impartidos por la Asociación Chilena de Seguridad, correspondientes a “Prevención de Riesgos en plantas de procesado de Militidos”, “Práctica segura en almacén en altura”, “Técnicas Básicas para la gestión de CPCH” (Comités Paritarios de Higiene y Seguridad) y “Operación Segura de Grúas Horquilla”.
28. Listado de asistencia donde consta la asistencia del trabajador Raúl Borquez a capacitación “Seguridad en grúas Horquillas” de fecha 13 de noviembre de 2017 y Evaluación de toma de conocimiento de capacitación Grúa Horquilla de fecha 13 de noviembre de 2017 del trabajador Raúl Bórquez.
29. Listado de asistencia de participación en capacitación de “Procedimiento de Grúa Horquilla”, “Check list diario de Grúa Horquilla” de fecha 15 de enero de 2018 de Raúl Bórquez Aguilar.
30. Listado de asistencia de participación en capacitación de “Instrucciones de seguridad trabajo de retroexcavadora”, y “Manejo a la defensiva de Grúas Horquillas” de fecha 9 de marzo de 2018, de Raúl Bórquez Aguilar.
31. Contrato de trabajo y anexo junto con descripción de cargo de trabajador Raúl Bórquez.
32. Certificado de nacimiento del menor de edad Hans Francisco España Wollmann, cédula nacional de identidad N° 23.444.662-2, hijo de Fredy España Cárdenas, omitido en la demanda.

## II.- Oficios:

- 1.- Respuesta de oficio de la Fiscalía Local de Castro, N° 1680/2022, de fecha 06 de abril 2022, agregado a folio 55.
- 2.- Respuesta de oficio del Servicio de Registro Civil e Identificación, ORD. N°161-2022, de fecha 02 de mayo de 2022, agregado a folio 67.

**OCTAVO:** Que, con fecha 22 de agosto de 2022, a folio 79, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 159 N° 6 del Código de Procedimiento Civil se decretó como medida para mejor resolver, traer a la vista la causa laboral Rit O-73-2019 y causa de



cumplimiento laboral Rit C-25-2020, ambas tramitadas ante el Juzgado del Trabajo de Castro, la cual fue cumplida con fecha 13 de septiembre de 2022, a folio 82.

Asimismo, con fecha 13 de septiembre de 2022, a folio 83, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 159 N° 1 del Código de Procedimiento Civil se decretó como medida para mejor resolver oficiar a la institución Previred a fin de que remitan toda la documentación con la que cuenten respecto del pago de cotizaciones previsionales obligatorias que tuvieran los demandantes de autos, la cual se tuvo cumplida con fecha 25 de noviembre de 2022, a folio 95.

**NOVENO:** Que, previo al análisis de los elementos de fondo de la acción incoada, es menester resolver las excepciones o defensas perentorias formuladas por la parte demandada, sobre: incompetencia relativa y absoluta del Tribunal, excepción perentoria de cosa juzgada; y falta de legitimación activa y pasiva.

### **III.- EN CUANTO A LA INCOMPETENCIA RELATIVA Y ABSOLUTA DEL TRIBUNAL:**

**DÉCIMO:** Que primero, alegó la parte demandada la incompetencia relativa y absoluta; fundada la primera en que, al encontrarse su domicilio en la ciudad de Santiago, debió en dicha ciudad interponerse la demanda en cuestión; y en cuanto a la segunda, afirmó que los hechos serían competencia de jurisdicción laboral según los argumentos de hecho y de derecho que expone en su contestación.

**UNDÉCIMO:** Que, a fin de resolver la incompetencia relativa, se tendrá presente lo dispuesto en el artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales: *"Cuando el demandado fuere una persona jurídica, se reputará por domicilio, para el objeto de fijar la competencia del juez, el lugar donde tenga su asiento la respectiva corporación o fundación. Si la persona jurídica demandada tuviere establecimientos, comisiones u oficinas que la representen en diversos lugares, como sucede con las sociedades comerciales, deberá ser demandada ante el juez del lugar donde exista el establecimiento, comisión u oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho que da origen al juicio"*; en el presente caso y para estos efectos, el establecimiento, agencia o sucursal se encuentra ubicado en camino a Teguel. Km. 1.2, Dalcahue, Región de los Lagos, el cual fue señalado expresamente en el libelo de la demanda, y que no fue refutado por la demandada, siendo carga de aquella desvirtuarlo.

**DUODÉCIMO:** Que, tratándose de una persona jurídica la demandada, los documentos rolantes a folio 36 de autos, permiten formar convicción en orden a que existe una sucursal de la demandada en el lugar en que ocurrieron los hechos, documentos que no han sido objetados por la contraria, especialmente respecto de una sucursal en camino a Teguel. Km. 1.5, Dalcahue, sin que se comparta lo indicado por la parte demandada, toda vez que la norma antes indicada permite fijar competencia, en cuanto dispone que deberá ser demandada ante el juez del lugar donde exista el establecimiento, comisión u oficina que





celebró el contrato que intervino en el hecho que da origen al juicio, verificándose la hipótesis indicada, se rechazará la alegación de la demandada en tal sentido.

**DÉCIMO TERCERO:** Que respecto al hecho de ser competente el tribunal con competencia en materia laboral, es del caso precisar, que quienes han comparecido promoviendo acciones indemnizatorias derivadas de accidentes del trabajo, con resultado de muerte de un trabajador, son víctimas por repercusión, y accionan por su daño personal y propio, reclamando -como alegan en su demanda responsabilidad extracontractual-, en el empleador de su padre fallecido, los perjuicios que por una acción u omisión de éste haya provocado el fallecimiento, no existiendo entre ellos y la demandada un vínculo de carácter laboral que implique y radique el conocimiento de la causa al juzgado de letras del trabajo.

**DÉCIMO CUARTO:** Que por lo anterior, la acción es deducida por personas distintas del trabajador, los hijos, terceros ajenos a la relación laboral, así las cosas la pretensión de conformidad a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 16.744, se ha realizado correctamente en sede civil.

En esta causa, se dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios, fundada en las normas contenidas en el Código Civil de reparación del daño en sede extracontractual, por consiguiente, en aplicación de las reglas generales sobre establecimiento de la competencia de los Tribunales de Letras, no cabe duda que este Tribunal es competente para conocer el presente litigio y ello determina igualmente el rechazo de la excepción de incompetencia absoluta planteada.

#### **IV.- EN CUANTO A LA EXCEPCION PERENTORIA DE COSA JUZGADA:**

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en cuanto a la excepción perentoria de cosa juzgada, formulada por la parte demandada, fundado en que se dan los presupuestos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los autos Rit O-73-2019 seguidos ante el Juzgado del Trabajo de Castro, por cumplirse según indicó con la triple identidad exigida por la ley para que operase, esto es: 1° identidad legal de personas; 2° identidad de la cosa pedida; y 3° identidad de la causa de pedir.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, la excepción de cosa juzgada es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales en virtud del cual no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior (Manual de Derecho procesal (Derecho Procesal Civil); Mario Casarino Viterbo, Tomo III, Sexta Edición, pág. 125).

Su trascendencia, en consecuencia, descansa en evitar que se pronuncien dos sentencias contradictorias sobre una misma materia. En cuanto a los requisitos de procedencia de la excepción de cosa juzgada, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil dispone “La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya: 1° Identidad legal de personas; 2° Identidad de



la cosa pedida; y 3° Identidad de la causa de pedir. Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, a efectos de resolver la excepción de cosa juzgada se tuvo a la vista la causa indicada Rit O-73-2019 seguidos ante el Juzgado del Trabajo de Castro, traída a la vista mediante medida para mejor resolver decretada, según ya se dijo.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, del análisis comparativo efectuado entre la acción incoada en autos con aquella invocada para oponer la excepción de cosa juzgada, fluye que, si bien entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta en sede laboral, hay identidad legal de personas, no ocurre lo mismo respecto del objeto y de la causa de pedir.

Que, en cuanto al segundo requisito de la excepción en comento, consistente en la identidad de la cosa pedida, tanto la doctrina como la jurisprudencia lo han definido como el beneficio jurídico que se reclama en juicio, el cual es posible determinar mediante el examen de la parte petitoria de ambas demandas. En el presente juicio, los actores solicitan en el libelo de folio 1, tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios en sede extracontractual, en contra de la empresa Blue Shell S.A., representada por don Juan Cristóbal Salinas Larraín, a fin de que sean condenados a pagar una indemnización por daño moral correspondiente a \$200.000.000, y \$ 227.432.016, a título de lucro cesante, o lo que el tribunal determine en definitiva, todo, con costas. En el libelo opuesto en sede laboral, por su parte, la demandante solicitó indemnización de perjuicios, y si bien por las mismas sumas referidas en este libelo, pero de conformidad al artículo 4° del Código del Trabajo.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, dicho lo anterior, es posible establecer que el beneficio reclamado en ambos juicios, si bien es la indemnización del daño producido a consecuencia del fallecimiento de su padre, mientras éste cumplía su jornada de trabajo en empresa de la demandada, en uno y otro juicio el resarcimiento solicitado deviene de obligaciones diferentes, mientras en aquel referido en sede laboral el objeto fluye de la obligación contractual entre el trabajador, y su empleador, conforme el artículo 184 del Código del Trabajo, en relación a las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores; en el presente juicio, se busca el resarcimiento de perjuicios propios de los demandantes.

Que, en consecuencia, la sentencia anterior dictada en sede laboral, por causa de incumplimiento de la normativa laboral, debe entenderse circunscrita a dichas obligaciones que emanaban entre el empleador y el trabajador, y de ahí que advirtiendo lo resuelto en dicho fallo laboral, no se condice con el objeto del caso sub lite, que busca la reparación del daño propio sufrido por los demandantes.

**VIGÉSIMO:** Que, en cuanto a la causa de pedir, y desde que la anterior sentencia se fundó en el estatuto de la responsabilidad contractual –en materia laboral- en tanto el libelo actual, lo hace en cuanto persigue la responsabilidad de quien alega la excepción en estudio, bajo



el estatuto de la responsabilidad extracontractual, de tal forma que se impone por este simple hecho su rechazo.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que por lo razonado, no habiéndose acreditado los supuestos que acrediten la excepción de cosa juzgada, los cuales deben concurrir de forma copulativa, no se hace lugar a la excepción alegada como excepción de fondo.

**V.- EN CUANTO A LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA:**

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que la parte demandada, alegó la falta de legitimación activa de la parte demandante, sostenida en que la responsabilidad extracontractual fundada en la Ley 16.744, se traduce en que los actores no han sido víctimas de ningún accidente regulado por esa codificación, y tampoco han argumentado su legitimación activa para accionar en algún otro estatuto que no sea de carácter laboral, derivado del accidente que sufrió su padre y cuyo responsable directo fue el Sr. Bórquez no Blue Shell S.A., quien en los autos penales seguidos contra éste por parte de La Fiscalía Local de Castro, y en este sentido, afirmó que la acción de indemnización incluso por daño moral es intransmisible y solo reclamable por la víctima del accidente, en ese caso laboral; y además, no se acredita la calidad de herederos de hijos del causante para sustentar su pretensión.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, la legitimación procesal, o legitimación en causa, es concebida por la doctrina especializada como un presupuesto de fondo y de eficacia jurídica de la acción, básica y esencial para acceder a la tutela judicial. Tal legitimación puede definirse como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso, que le permite obtener una providencia eficaz.

En este sentido, la legitimación activa es el reconocimiento que el ordenamiento efectúa a una persona otorgando la posibilidad de accionar eficazmente atendida la relación existente entre el sujeto y el objeto de un proceso determinado, en tanto la pasiva se relaciona con la posibilidad que se accione en contra del sujeto de quien se dirige la acción. "La legitimación procesal o legitimatio ad causam, entonces, es la consideración legal, respecto de un proceso particular, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto de litigio y en virtud del cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que dichas personas figuran como tales en el proceso" (Cristián Maturana Miquel, "Disposiciones comunes a todos procedimientos", Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento derecho procesal).

Cabe asimismo recordar, que la legitimación no es un requisito para que el demandante materialice el ejercicio de la acción, sino para que la sentencia que en definitiva se pronuncie lo tenga por ganancioso o perdedoso del derecho que reclama. Así, si los antecedentes demuestran la insuficiencia de la legitimación, no cabe sino desestimar la acción, no por encontrarse mal deducida, sino porque la misma no corresponde, al



demandante (falta de legitimación activa) o contra el demandado (falta de legitimación pasiva).

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que desechada la excepción de incompetencia absoluta, según se indicó en los motivos décimo tercero y décimo cuarto, y en concordancia con lo ya razonado, la excepción perentoria de falta de legitimación activa será rechazada, en primer lugar, porque como ya se dijo, los actores comparecen pretendiendo la indemnización de los perjuicios ocasionados por el fallecimiento de su padre, a título personal, y no en su calidad de herederos del mismo, ejerciendo las acciones que a éste le hubieren correspondido, careciendo de relevancia y perdiendo fuerza la argumentación sostenida sobre este punto por el demandado, sobre la intransmisibilidad de la acción como víctimas del accidente, herederos del trabajador fallecido.

Que, sobre la alegación de la demandada, en relación a la existencia de otros hijos del trabajador fallecido, si bien acreditó mediante certificado de nacimiento de folio 57, la existencia de otro hijo, no ejerció el derecho contemplado en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, a fin de satisfacer la exigencia anotada, se ponga en conocimiento de aquél la demanda, o al menos no fue solicitado, perdiendo relevancia el hecho que pudieran existir otros herederos del trabajador fallecido, que no hubieren comparecido a ejercer la acción resarcitoria, atendido los daños reclamados.

Por otra parte, los descendientes (caso de los demandantes) pertenecen al primer orden de sucesión, de conformidad lo dispone el artículo 988 del Código Civil, categorización de la cual no existe normativa que imponga su aplicación en el ámbito de la legitimación para ser parte en un juicio.

Que, desde luego, la acción civil de las víctimas por repercusión, en el presente caso, es a título personal, es decir, de modo autónomo e independiente, como personalmente afectadas, a nombre propio, y no en su condición de representantes del trabajador fallecido. Así pues, el sujeto activo de la acción de reparación por daño moral por repercusión es todo perjudicado o dañado con el acto ilícito, y en conclusión, quienes han comparecido pretendiendo la indemnización de perjuicios solicitada, se encuentran legitimados para accionar, por lo que la excepción anotada será rechazada como se dirá.

#### **VI.- EN CUANTO A LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA:**

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que la parte demandada, alegó falta de legitimación pasiva, por la incapacidad de las personas jurídicas de cometer delitos o cuasidelitos y que, por que por expresa disposición de ley, el obligado a indemnizar es aquel que “ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro”, en atención a ello, y que , Blue Shell no ha cometido ningún ilícito civil, ni delito ni cuasi delito civil, y que quien sí lo cometió fue el Sr. Borquez, quien según el artículo 2314 del Código Civil es al que se le impone la obligación de indemnizar, por ser él quien causó por su actuar negligente imprudente y temerario el accidente, no estando en la hipótesis del artículo 2317 del Código Civil.



**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, en cuanto a la falta de legitimación pasiva del demandado, ésta se basa en la falta de responsabilidad del demandado como persona jurídica en la causa que generó el supuesto daño, no existiendo, por ende, relación de causalidad entre el daño y alguna acción u omisión atribuible a su parte, y sí al Sr. Bórquez, a quien se le impondría la obligación de indemnizar, por ser quien causó por su actuar negligente, imprudente y temerario el accidente. Al respecto, cabe tener presente que tanto la determinación del daño, como del actuar negligente o culpable del demandado y la relación de causalidad entre estos elementos, constituyen precisamente asuntos a dilucidar en este juicio por la vía del conocimiento del fondo de la causa, y no por la vía de la excepción opuesta.

Que en consecuencia y de conformidad a lo razonado precedentemente, no configurándose en la especie los presupuestos de la falta de legitimación pasiva invocada por la demandada, deberá necesariamente rechazarse esta alegación, ello sin perjuicio de lo que se resuelve en cuanto al fondo del asunto sometido a la decisión del Tribunal.

**VII.- EN CUANTO A LA DEMANDA DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL:**

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, comenzando el análisis de la acción incoada en autos, es útil recordar que esta encuentra sustento jurídico en lo dispuesto en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. El primero de ellos dispone que *“el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización”*. Por su parte, el segundo de los preceptos citados reza que *“por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.”* Del contenido los preceptos legales transcritos, como de las demás que componen el Título XXXV del Libro Cuarto del estatuto civil, se colige que los requisitos que deben concurrir para que un acto dé lugar a indemnización, son los siguientes:

- a) *Que el demandado incurra en una omisión o ejecute una acción*
- b) *Que se incurra en ella o se ejecute por el agente con culpa o dolo.*
- c) *Que se ocasione un perjuicio al actor*
- d) *Que exista relación de causalidad entre la acción u omisión y el perjuicio.*

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, de forma previa al análisis sobre la concurrencia de los elementos de la acción de responsabilidad civil incoada en autos, es pertinente contextualizar que, los hechos que dan origen a la presente causa, se enmarcan dentro de los deberes de cuidado que el empleador tiene para con su trabajador. En este sentido, el artículo 184 del Código del Trabajo establece: *“El empleador estará obligado tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”*.



**VIGÉSIMO NOVENO:** Que, por su lado, el artículo 5 de la Ley N° 16.744 establece: *“Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.”*

**TRIGÉSIMO:** Que, a su turno, el artículo 69 de la Ley N° 16.744 dispone: *“Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:....(...) y b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”.*

**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Que, relacionando lo anterior, con la acción de indemnización de perjuicios incoada en autos, cabe señalar respecto a los elementos de la acción en estudio, que son hechos acreditados, y se encuentran conformes en autos:

1° Que don Fredy Eladio España Cárdenas, era trabajador dependiente bajo vínculo de subordinación y dependencia de la demandada Blue Shell S.A.,

2° Que el trabajador indicado, falleció mientras prestaba servicios para la empresa demandada, el día 22 de noviembre de 2018, mientras trabajaba en el área de planta de harina, y realizaba instalación de ductos de extracción de vapores, sobre un canastillo alza hombre hechizo, a una altura de 5 metros elevados por una grúa horquilla, al finalizar la instalación y cuando solicita al yalero que lo baje, ya que había terminado su trabajo, la grúa retrocede generando un golpe y apriete de la víctima, contra la estructura del cielo raso (termo panel) y el canastillo alza al hombre; de inmediato se da aviso a la unidad de emergencia, siendo trasladado en ambulancia al Centro de Salud de Dalcahue, donde fallece.

3° Que, de la sentencia dictada en sede laboral, se desprende que la parte demandada fue condenada al pago de indemnización de perjuicios por daño moral, y en ella se concluyó: *“..., que existiendo las herramientas necesarias para efectuar un trabajo seguro, considerando que era una faena programa según declaran los testigos presentados por la empresa, no se hayan tomado las medidas necesarias para que todas las tareas fueran ejecutadas de forma segura y protegida”.* En este punto, conviene acotar que, el fallecimiento de don Fredy Eladio España Cárdenas, fue consecuencia directa e inmediata del accidente sufrido a raíz del incumplimiento del deber de protección y cuidado que pesa sobre el empleador.



4° Que, además se encuentra acreditado suficientemente la calidad de hijos de los demandantes respecto del trabajador fallecido, según el mérito de los certificados de nacimiento de estos, agregados en folio 36, y por su parte la calidad de herederos del causante se encuentra probada mediante oficio contestado al efecto por Servicio de Registro Civil e Identificación, agregado en folio 67.

**TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Que primero, resulta conveniente pronunciarse sobre la falta de responsabilidad de la persona jurídica que argumentó la parte demandada, y en este sentido, además su falta de legitimación pasiva, fundado en que las personas jurídicas, son incapaces de dolo o culpa y por tanto de todo delito o cuasidelito civil, pues la responsabilidad reclamada, podría haberse alegado por los actores en la teoría de la representación o en la teoría de órganos, y que de la demanda, no se hace posible recurrir a la presunción de responsabilidad por el hecho del dependiente, conforme lo prescriben los artículo 2320 y 2322 del Código Civil.

Además, sostuvo que quien sí cometió y le cabría responsabilidad en los hechos cuyo resarcimiento se solicita fue el Sr. Bórquez, quien según el artículo 2314 del Código Civil es al que se le impone la obligación de indemnizar, por ser quien causó por su actuar negligente imprudente y temerario el accidente, no estando en la hipótesis del artículo 2317 del Código Civil.

**TRIGÉSIMO TERCERO:** Que para resolver, no ha sido cuestionado primero, que Sr. Bórquez a quien la demandada imputa el actuar negligente y culposo en los hechos denunciados, es efectivamente dependiente de la empresa demandada, y en efecto, además acompañó: contrato trabajo de Raúl Bórquez Aguilar de fecha 18 de noviembre de 2014, y anexo de contrato de fecha 1 de febrero de 2015 se modifica cargo a “Operador de Grúa Horquilla” y descriptor de cargo suscrito por el actor; y por ello, es posible para este sentenciador declarar que concurre, la posición jurídica que permite aplicar a la demandada el régimen por responsabilidad por hecho ajeno contemplado en el artículo 2320 del Código Civil, en relación a los actos cometidos por uno de sus dependientes.

Que no obstante, señalarse en particular por la demandante en su demanda, el que sustenta su acción contra la demandada en el hecho originado por un tercero, lo cierto es, que deviene de los hechos relatados y de las circunstancias en que ocurrieron los mismos, no pudiendo soslayarse la falta de responsabilidad, en el hecho de no haberse hecho valer en la acción por los actores, la relación de causalidad entre el hecho de un tercero y los daños, por cuanto imputan la acción culposa en haber hecho trabajar a su padre en una labor que no le correspondía y por no adoptar ni proveer las medidas de seguridad necesaria para evitar fatales accidentes como el ocurrido por parte de la empresa demandada.

Que, por consiguiente, resulta irrelevante que los actores hubiesen omitido mencionar el artículo 2320 o 2322 del Código Civil, toda vez que su aplicación al caso concreto luego de la calificación jurídica de los hechos, es atribución exclusiva del juez de la causa, de



manera que las alegaciones de falta de legitimación pasiva, como fue alegada, carece de total fundamento.

En definitiva, en estos casos, la empresa debe responder civilmente por el hecho de sus dependientes, en la medida que las actuaciones de estos últimos causen daño, y no logren acreditar haber desplegado las conductas necesarias para evitar que estas actuaciones ocurrieran, restando en tal sentido, acreditar la relación de causalidad entre el daño ocasionado y los perjuicios reclamados.

**TRIGÉSIMO CUARTO:** Que, en cuanto las personas jurídicas son incapaces de dolo o culpa en materia civil, sólo restar indicar, que establecida la relación de dependencia o cuidado de quien realiza un acto susceptible de generar responsabilidad, se presume la culpabilidad de quienes deben ejercer ese cuidado, de modo que sólo pueden exonerarse de esa responsabilidad si logran probar que “con la autoridad y el cuidado que la respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho” (artículo 2320 inciso 5° y 2322 inciso 2° del Código Civil).

En síntesis, las personas jurídicas, al igual que las personas naturales responden si bien por sus hechos propios que son los imputables directamente a la persona jurídica, responden, además, por el hecho ajeno cometido por sus dependientes, como en el caso sub lite.

**TRIGÉSIMO QUINTO:** Que, ahora bien, en cuanto a la acción propiamente tal, la parte demandante, argumentó que los hechos descritos precedentemente tienen su causa en la infracción del empleador a la obligación de proteger la vida y salud de sus trabajadores, según el artículo 184 inciso 1° del Código del Trabajo; y que no solo debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores, sino que dicha conducta debe ser eficaz, es decir, debe ser capaz de lograr el efecto que se desea o espera, en consecuencia, debe evitar todo daño a la vida o salud del empleado; relacionado todo ello, además a los artículos 66 de la Ley N° 16.744 y 210 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3 y 53, acápite 1° del D.S. N° 594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

**TRIGÉSIMO SEXTO:** Que, en relación al deber de cuidado del empleador, se ha sostenido por la doctrina, que aquella provienen de tres fuentes, a saber, la ley, las regulaciones administrativas, así como también los reglamentos internos de seguridad laboral. La infracción a estas reglas da lugar a culpa infraccional. Además, está regida por los usos normativos de prevención de riesgo en la industria respectiva. Finalmente, el empleador está sujeto a los deberes generales de cuidado que responden al estándar del empresario razonable y diligente. En atención a que se trata de reglas de orden público, a efectos de construir en concreto estos estándares, resulta indiferente que la responsabilidad sea calificada bajo un estatuto de responsabilidad contractual o extracontractual. (Barros





Bourie, Enrique: *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, 1º Edición, Editorial Jurídica, Santiago, 2006, p.706)

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, en relación con los estándares de deber de cuidado del empleador aquellos pueden construirse desde la perspectiva de los deberes de cuidados exigidos por los usos normativos de la actividad, además, de las regulaciones legales y administrativas y, también, desde la perspectiva de los deberes de cuidado contruidos en conformidad al estándar del empresario diligente. Y sobre este último estándar, se han postulado como aspectos principales que, quedan comprendidos en él, el personal competente, el equipamiento adecuado, la seguridad en el espacio físico donde se trabaja; y la organización industrial eficiente. Y éste último, se refiere especialmente, al establecimiento de un sistema de seguridad proporcionado al riesgo, a instrucciones apropiadas y a un mecanismo de supervisión para comprobar que el sistema de instrucciones funciona adecuadamente (Barros Bourie, Enrique: *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Editorial Jurídica, 1º Edición, Editorial Jurídica, Santiago, 2006, p.707-709).

**TRIGÉSIMO OCTAVO:** Que la infracción al deber de cuidado exigida al empleador demandado, se tiene por establecida con el mérito de la investigación sumaria, Resolución N° 1910164, de fecha 22 de febrero de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, allegada al proceso a instancias de la parte demandante, la cual concluyó con una sanción a la empresa demandada, por no cumplir con la supervisión adecuada para suprimir los factores de peligro que afectó la salud del trabajador Fredy Eladio España Cárdenas RUN N° 11.717.496-4 (Q.E.P.D.), causándole la muerte.

Que, la resolución referida, indicó que el día preciso del accidente, el día 22 de noviembre de 2018, fiscalizadores de la Unidad de Salud Ocupacional se encontraban realizando una visita inspectiva en dependencias de la empresa, por ende, tuvieron acceso inmediato al accidente fatal del trabajador, y por ello, las conclusiones de su Informe Técnico aportan mayor verosimilitud respecto a los hechos constatados en el Acta de Inspección, las infracciones cometidas por la empresa al momento del accidente fatal y la revisión documental aportada por la empresa posteriormente. Que, dicho Informe Técnico concluyó que el examen de altura del trabajador no estaba vigente, que el procedimiento de trabajo seguro no es acorde a la actividad realizada; que no se constata conocimiento del procedimiento por parte del trabajador; que no se realiza identificación de peligros y evaluación de riesgos de la actividad; que el trabajador no cuenta con obligación de informar firmada de acuerdo con la actividad realizada y por último, que la utilización de grúa horquilla para izaje de personas obvió instrucciones del fabricante. Todo lo anterior, constituyeron infracciones relacionadas con los artículos 184 del Código del Trabajo y artículo 3 y 37 inciso primero del Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de



Salud; y que la empresa incurrió en infracción al artículo 21 del Decreto Supremo N° 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

**TRIGÉSIMO NOVENO:** Que, en efecto, de los antecedentes del sumario administrativo reseñados en el motivo precedente, sumado a la sentencia pronunciada en sede laboral autos Rit O-73-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, y tenida a la vista, se desprende con meridiana claridad que el demandado no cumplió con el estándar de protección de la vida del trabajador al que se encuentra obligado desde que como se consideró en la sentencia aludida: *“..., el accidente del señor Fredy España, ocurre cuando él estaba en altura en un canastillo por medio de una grúa horquilla. En este punto, los informes de Carabineros de Chile, del Ministerio Público e Inspección del Trabajo, son coincidentes en señalar que ese canastillo era “hechizo”, “manual” o “modificado”. La empresa en su caso, dice que esto no era “hechizo” y que es una maquinaria comprada en el extranjero que cumple con los estándares de seguridad. Para acreditarlo acompaña fotografías del canastillo, las instrucciones para el servicio de plataformas de trabajo para carretillas, procedimiento seguro en área de patio, y dos hojas o láminas de dibujos de la máquina que tienen su explicación en alemán por lo cual es imposible e improcedente valorarlas ya que no tienen traducción oficial”*. Luego, razonó la juzgadora del grado que: *“..., la máquina utilizada por las empresas para trabajo seguro en altura es aquella denominada “Grúa Tijera para levante de personas”, que es una plataforma con brazos en forma de tijera para izar de personas que contiene los controles de funcionamiento al interior del cubículo que usan los trabajadores, de tal modo que son ellos los que lo controlan y no un tercero. (...)Entonces resulta ilógico que existiendo las herramientas necesarias para efectuar un trabajo seguro, considerando que era una faena programa según declaran los testigos presentados por la empresa, no se hayan tomado las medidas necesarias para que todas las tareas fueran ejecutadas de forma segura y protegida”*.

De lo expuesto, este sumario y sentencia laboral dictada en proceso anterior en materia laboral, constituye una presunción grave en los términos del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil y, por ende, constituye plena prueba sobre el hecho que se verifican las omisiones achacadas por la parte demandante a la demandada en materia de protección de la vida del trabajador, verificándose una omisión culpable de la demandada con culpa infraccional, por lo que se tienen por acreditados los dos primeros elementos de la acción de responsabilidad civil en estudio.

**CUADRAGÉSIMO:** Que, en relación al elemento de la acción en análisis se puede soslayar que, la demandada se defendió argumentado que sí adoptó todas las medidas pertinentes para proteger la vida y la salud del señor España Cárdenas, cumpliendo al efecto con la obligación impuesta por el artículo 184 del Código del Trabajo y, en ese sentido, hizo presente que si adoptó todas y cada una de las medidas posibles dadas por la



seguridad ocupacional y por la ley vigente a la fecha de los hechos concretos narrados en la demanda.

**CUADRAGÉSIMO PRIMERO:** Que en lo concerniente a la existencia de medidas de protección que esgrime la demandada, se aparejó por ella al proceso, en la especie: documento titulado “Trabajo seguro en área de mantención” con fecha de revisión 27 de julio del año 201; documento titulado “Trabajo seguro, operación de grúas horquillas” con fecha de revisión 15 de noviembre del año 2018, elaborado en el año 2013; documento titulado “Trabajo seguro, operación de grúas horquillas” con fecha de revisión 26 de abril del año 2018, elaborado el 20 de diciembre del año 2013; documento titulado “Procedimiento de trabajo en altura” con fecha de revisión 27 de julio del año 2018, elaborado el 29 de marzo del año 2016; documento titulado “Procedimiento de trabajo seguro en la recepción” elaborado con fecha 18 de enero del año 2016; documento titulado “Trabajo seguro en área de mantención” con fecha de revisión 27 de julio del año 2018, elaborado el 18 de enero del año 2016; documento titulado “Procedimiento de trabajo seguro en área patio” elaborado con fecha 18 de enero del año 2016; comprobante de asistencia charla “Procedimiento de Trabajo en área de mantención” de fecha 12 de septiembre de 2016; comprobante de asistencia charla “Trabajo en Altura” y “Manipulación tableros eléctricos /contacto eléctrico”, de fecha 13 de diciembre de 2017; comprobante de asistencia charla “Procedimiento accidente del trabajo”, y material entregado en la charla, de fecha 14 de noviembre de 2016, en la cual estuvo presente el trabajador accidentado Freddy España; comprobante de asistencia charla “Capacitación seguridad en caso de amoníaco”, “capacitación seguridad en trabajos de mantención”, de fecha 27 de agosto de 2018; informe técnico de la ACHS, de fecha 13 de diciembre de 2018, estableciendo la causa del accidente; cuatro declaraciones de testigos a la fecha del accidente; informe de investigación de comité paritario por el accidente; informe de investigación del Departamento de Prevención de Riesgos; anexo de contrato de trabajo del accidentado trabajador don Freddy España, y el cual señala y refiere que él era el supervisor de mantención; Contrato trabajo de Raúl Bórquez Aguilar de fecha 18 de noviembre de 2014, y anexo de contrato de fecha 1 de febrero de 2015 de modifica cargo a “Operador de Grúa Horquilla” y descriptor de cargo suscrito por el actor; copia de Licencia de Conducir Profesional clases B y D, del señor Raúl Bórquez Aguilar, emitida con fecha 25 de julio de 2017; cuatro copias de diplomas por participación de Raúl Bórquez Aguilar en cursos impartidos por la Asociación Chilena de Seguridad, correspondientes a “Prevención de Riesgos en plantas de procesado de Militidos”, “Práctica segura en almacén en altura”, “Técnicas Básicas para la gestión de CPCH” (Comités Paritarios de Higiene y Seguridad) y “Operación Segura de Grúas Horquilla”; listado de asistencia donde consta la asistencia del trabajador Raúl Borquez a capacitación “Seguridad en grúas Horquillas” de fecha 13 de noviembre de 2017 y Evaluación de toma de conocimiento de capacitación Grúa Horquilla



de fecha 13 de noviembre de 2017 del trabajador Raúl Bórquez; listado de asistencia de participación en capacitación de “Procedimiento de Grúa Horquilla”, “Check list diario de Grúa Horquilla” de fecha 15 de enero de 2018 de Raúl Bórquez Aguilar; listado de asistencia de participación en capacitación de “Instrucciones de seguridad trabajo de retroexcavadora”, y “Manejo a la defensiva de Grúas Horquillas” de fecha 9 de marzo de 2018, de Raúl Bórquez Aguilar; contrato de trabajo y anexo junto con descripción de cargo de trabajador Raúl Bórquez.

En efecto, de la documentación aludida ponderada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 426 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, constituye una presunción grave y plena prueba sobre el hecho que el trabajador recibió charlas del derecho a saber, sobre el trabajo seguro, operación de grúas horquillas, procedimiento de trabajo en altura; procedimiento de trabajo seguro en la recepción, trabajo seguro en área de mantención; procedimiento de trabajo seguro en área patio; y asistencia a charlas en la materia, “Trabajo en Altura” y “Manipulación tableros eléctricos /contacto eléctrico”, “Procedimiento accidente del trabajo”, entre otros, y en las fechas indicadas en dichos documentos.

**CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:** Que no obstante lo anterior, pese a acreditarse la existencia de medidas de seguridad no se puede perder de vista que, el artículo 184 del Código del Trabajo dispone que deben adoptarse todas aquellas medidas para proteger eficazmente la vida del trabajador, es decir, con eficacia, con la “*capacidad de lograr el efecto que se desea o espera*”<sup>1</sup>, pero es claro que ese estándar legal, en este caso, no se ha cumplido, ya que el trabajador falleció.

De hecho, sobre las medidas adoptadas por el empleador demandado, cabe comentar que el trabajador fallecido, asumió un nuevo cargo en enero de 2018, importa para este caso concreto, la existencia de capacitaciones coetáneas o posteriores al 1 de enero de 2018, ya que las anteriores no son válidas legalmente para acreditar el cumplimiento de la obligación de información que pesa sobre el empleador, es decir, la obligación de informar a los trabajadores sobre el riesgo que extraña sus labores, ya que evidentemente eran cargos o funciones distintas con diferentes riesgos. Posterior a enero de 2018, solo se acompaña a juicio un acta de capacitación de fecha 27 de agosto de 2018, que se titula “capacitación seguridad uso de amoniaco”, y “capacitación seguridad en trabajos de mantención”, de fecha 27 de agosto de 2018; aun cuando la capacitación de mantención efectivamente se realizara en la fecha indicada, tampoco acredita la capacitación del trabajador fallecido ya que de ese documento es imposible inferir si el trabajo era en altura, así como el izar en la plataforma a través de grúa horquilla, estaba considerada. Por lo tanto, existe incumplimiento por parte del empleador de otorgar a su trabajador el deber

<sup>1</sup> Eficacia según definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua.



información sobre el riesgo que entrañan sus labores, así como también la capacitación de trabajo riesgoso, según lo ordena el artículo 184 del Código del Trabajo.

Luego, de lo que se lleva dicho, es palmario que las medidas de seguridad adoptadas por la demandada no cumplieron el estándar para proteger eficazmente la vida del trabajador, tal y como lo exige el artículo 184 del Código del Trabajo, lo que conduce a rechazar esta defensa de la demandada, sin perjuicio de lo que se resuelva en lo sucesivo sobre la indemnización de perjuicios, en el evento de acogerse la demanda.

**CUADRAGÉSIMO TERCERO:** Que, en cuanto al tercer elemento de la acción, este es, el daño, este se tiene por establecido con el mérito del informe de autopsia allegado al proceso N° X-CAS-A-148-18, evacuado por el médico legista Dr. Jesús Blanco Duarte, el cual se pondera como un instrumento público en los términos del artículo 1699 del Código Civil y se le atribuye valor de plena prueba, sobre el hecho que don Fredy Eladio España Cárdenas, de 47 años, falleció por Shock Hipovolemico, con antecedente de un traumatismo toraco-abdominal cerrado, por accidente laboral, del todo coherente con las conclusiones a las que se arribó en el sumario instruido por y ya referido en autos.

**CUADRAGÉSIMO CUARTO:** Que, en relación al nexo causal entre la omisión culpable de la demandada y la muerte del trabajador señor España Cárdenas, se puede establecer aplicando la teoría de la equivalencia de las condiciones habida consideración que suprimidas mental e hipotéticamente las omisiones en que incurrió la demandada, la muerte del trabajador no se hubiera producido. Relación de causalidad que queda plenamente demostrada con el sumario instruido por la autoridad administrativa, ya aludido precedentemente, y por la sentencia laboral dictada en proceso Rit O-73-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, que tuvo por acreditado que las lesiones ocasionados al trabajador, así como su fallecimiento, fueron consecuencia directa e inmediata del accidente sufrido a raíz del deber de protección y cuidado que pesaba sobre el empleador, en este punto, resulta conveniente acotar que la sentencia como medio probatorio, en un procedimiento anterior, y como instrumento público, da cuenta del resultado de la actividad jurisdiccional desplegada, y como tal, sirve de base para construir una presunción judicial sobre la existencia de los hechos y las circunstancias que lo rodearon, y en este sentido, la sentencia como un hecho jurídico pone énfasis en la inmutabilidad y la certeza jurídica que con ella se obtiene.

**CUADRAGÉSIMO QUINTO:** Que, en consecuencia, se han podido establecer todos y cada uno de los elementos de la acción de responsabilidad civil impetrada, razón por la cual se rechazan las defensas de la demandada sobre falta de responsabilidad de la persona jurídica, y cumplimiento del deber legal de protección, e inexistencia de relación de causalidad.

**CUADRAGÉSIMO SEXTO:** Que en relación a la indemnización demandada, los actores solicitan reparación del daño moral sufrido por el fallecimiento de su padre, don Fredy



Eladio España Cárdenas, consistente en el dolor, pesar y angustia que sufrieron por la repentina muerte de su familiar.

**CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, desde una perspectiva amplia, el daño moral puede entenderse como todo daño extrapatrimonial que sufre la persona en sus sentimientos, atributos y facultades (Corral Talciani, Hernán Felipe: “*Lecciones de responsabilidad civil extracontractual*”, Editorial Jurídica, Santiago, 2003, p. 154).

**CUADRAGÉSIMO OCTAVO:** Que, en relación con el daño moral, de los certificados de nacimiento que rolan a folio 36, instrumentos públicos a los cuales se les atribuye el valor de plena prueba, emana que existió un vínculo de parentesco entre Maryori Yassel España Mansilla, Yarissa Allin España Mansilla, y Vicente Manuel España Mansilla, y el trabajador fallecido, siendo éste el padre de las demandantes.

En relación a la prueba aportada por estos actores para acreditar el daño moral, es del caso comentar que, si bien es escasa, no se puede eludir que se ha postulado sobre la prueba del daño moral, que ésta puede ser más flexible en relación a la determinación de daño material que puede sufrir la víctima (Corral Talciani, Hernán Felipe: “*Lecciones de responsabilidad civil extracontractual*”, Editorial Jurídica, Santiago, 2003, p. 164). Así las cosas, del mérito del proceso se puede establecer sobre la base de presunciones que el menoscabo moral respecto a estos actores existió, pues hay un vínculo de parentesco con el trabajador fallecido y, por otro lado, están las circunstancias de la muerte del trabajador, pues se trataba de un hombre joven de solo 47 años, que falleció de forma intempestiva en su trabajo, y por lo demás, parece lógico que experimenten pesar y angustia por la muerte de un familiar cercano, basado todo ello en el principio de normalidad, esto es, que basta la acreditación del hecho dañoso, para que la existencia del daño moral se presuma.

**CUADRAGÉSIMO NOVENO:** Que para la estimación pecuniaria de este daño moral, el tribunal tendrá especialmente en cuenta, que los demandantes no rindieron prueba testimonial, ni ninguna otra que dé cuenta de alguna afectación psicológica producto del fallecimiento de su padre, sin perjuicio de lo cual, atendido el lazo de parentesco que los unía con el fallecido, esto es ser sus hijos, dicha relación de parentesco, importa la ocurrencia de una afectación de carácter moral, esto es, el dolor de un hijo ante la pérdida de un padre, la que en este sentido, no requiere de prueba alguna, por lo que, en definitiva, se valorará prudencialmente y se fijará el daño moral en la suma de \$30.000.000. Monto de dinero que se pagarán con los respectivos reajustes e intereses, según se determinará en lo resolutivo, teniendo presente para ello que el demandante en la parte petitoria del libelo facultó al tribunal para fijar un monto de indemnización conforme al mérito del proceso.

**QUINCUGÉSIMO:** Que, por otro lado, respecto de la pretensión por lucro cesante, los demandantes, atendido sus edades, y que de todas las remuneraciones que habría percibido su padre fallecido, hasta su jubilación, de no haber sufrido el accidente de trabajo imputable a la demandada, y de todos los hechos contenidos en esta demanda solicitaron la suma de



\$227.432.016, considerando la expectativa de trabajo hasta los 65 años de edad y la remuneración recibida por su padre en el mes de octubre previo a su muerte, a efecto de determinar su cuantía.

**QUINCUAGÉSIMO PRIMERO:** Que, en cuanto al lucro cesante demandado, es necesario tener en consideración que aquel consiste en la pérdida de una ganancia o de una utilidad legítima y cierta que deja de percibir el actor, en este caso por el fallecimiento del trabajador, y que debe ser acreditado.

Que el lucro cesante demandado, no puede prosperar, desde que por su carácter esencialmente eventual, la posibilidad de obtener ciertas sumas de dinero en el largo tiempo, por el trabajador, no es cierta, puesto que los contratos de trabajo y sus condiciones se encuentran sujetos a múltiples contingencias, y por ello no existen elementos que permitan determinar que hubiere perdurado de por vida o hasta la jubilación del trabajador la dependencia laboral con la empresa demandada,- que de no haber mediado el accidente-, en definitiva se habría extendido la relación laboral entre el trabajador fallecido y la demandada.

Que, en conclusión, estima este juzgador, no es suficiente caracterizar el lucro cesante, en el eventual menor ingreso que soportarán ante la pérdida de su padre, pues para que el lucro cesante sea indemnizable, debe tratarse de la privación de una ganancia cierta y no de la posibilidad de su obtención a largo plazo como se plantea por la parte demandante, multiplicando los ingresos del fallecido por el tiempo que faltaba para que cumpliera 65 años. Sobre el particular, la doctrina, jurisprudencia, e incluso la legislación moderna están conformes en que para llegar a establecer la existencia y monto del lucro cesante es necesario un juicio de probabilidad en cuanto a su existencia y cuantía, sin que éste necesariamente deba ser seguro, matemático, exacto e infalible.

**QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO:** Que, a juicio de esta sentenciador, no se aportaron antecedentes para establecer la existencia de una utilidad cierta y no eventual, o al menos determinable que hubiere dejado de percibir el trabajador fallecido, y a mayor abundamiento, no existe probanza alguna en la causa, que permita establecer consideraciones fundadas y razonables, dentro del proceso de la normalidad de las cosas, a fin de aspirar a una certeza que es posible de encontrar en la especie, en cuanto los demandantes hayan sido privados de la ayuda pecuniaria que les hubiere proporcionado su padre, como que éste hubiere sido alimentante de aquellos, se encontraren actualmente estudiando según sus edades, y que a mayor abundamiento, del informe remitido por Previred, al menos dos de los tres demandantes, se encuentran desarrollando actividades remuneradas, motivo por el cual no concurren los presupuestos fácticos necesarios para dar por cierto el lucro cesante solicitado y por lo mismo no podrá condenarse a su reparación.

**QUINCUAGÉSIMO TERCERO:** Que, en conclusión, estima\$ este juzgador, no es suficiente caracterizar el lucro cesante en el eventual menor ingreso que soportarán ante la



pérdida de su padre, pues para que el lucro cesante sea indemnizable, debe tratarse de la privación de una ganancia cierta y no de la posibilidad de su obtención a largo plazo como se plantea por la parte demandante, multiplicando los ingresos del fallecido por el tiempo que faltaba para que cumpliera 65 años. Sobre el particular, la doctrina, jurisprudencia, e incluso la legislación moderna están conformes en que para llegar a establecer la existencia y monto del lucro cesante es necesario un juicio de probabilidad en cuanto a su existencia y cuantía, sin que éste necesariamente deba ser seguro, matemático, exacto e infalible.

**QUINCUAGÉSIMO CUARTO:** Que en cuanto a las costas se eximirá a la demandada de su pago, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, ya que no resultara absolutamente vencida, desde el momento que no se accede al lucro cesante demandado.

**QUINCUAGÉSIMO QUINTO:** Que el resto de la prueba documental rendida por la parte demandada y que no ha sido especialmente pormenorizada en su análisis, resultaba irrelevante y no altera las conclusiones a las que ha arriba el tribunal para dar por establecido los elementos que configuran la responsabilidad civil en el caso concreto por la parte demandada, sobre la base del análisis y ponderación de la prueba que sí resultaba pertinente.

En este sentido, los ebook de causa rol C-1093-2020 llevado ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt; sentencia del Exc. Tribunal Constitucional, autos Rol 8823-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020; Rol C-1093-2020 sustanciado ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt; ebook causa Rol C-1714-2020 llevado ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt; sentencia del Exc. Tribunal Constitucional de fecha 25 de noviembre de 2021, de los autos rol 10383-2021, rol C-1714-2021 sustanciado ante el 1º Juzgado Civil de Puerto Montt; copia de la carpeta investigativa de los autos ruc 1810053519-3 seguidos ante la Fiscalía Local de Castro; y copia del acta de la audiencia de acuerdo reparatorio de los autos Rit 2651-2018 seguidos ante el Juzgado de Garantía de Castro, de fecha 7 de agosto del año 2019; no resultan relevantes para desvirtuar la dinámica de los hechos ya establecidos, ni para desvirtuar la procedencia de la responsabilidad civil de la demandada que surge de los mencionados hechos, y que permitieron formar convicción sobre los hechos ajenos de sus dependientes y que provocaron la muerte del trabajador fallecido, según ya se explicó precedentemente.

Por estas consideraciones y, vistos además, lo dispuesto en el artículo 88, 89, 90, 144, 160, 144, 160, 170, 254, 342, 346, 384, 425, 426 del Código de Procedimiento Civil; artículos 1698, 1700, 1702, 2314, 2320, 2329 del Código Civil; artículo 184 del Código del Trabajo; artículos 5 y 69 de la Ley N° 16.744 y demás pertinentes; **SE DECLARA:**

- I. Que, **se acogen**, las tachas opuestas, formulada por la abogada demandante, en contra de los testigos de la demandada don Abel Patricio Levi Manquicheo y don Aladino Raúl Venegas González, sin cotas





- II. Que, **se rechaza**, la excepción de incompetencia relativa y absoluta, formulada por la parte demandada en su contestación de demanda, en presentación de fecha 19 de enero 2022, a folio 16, sin costas.
- III. Que **se rechaza**, la excepción perentoria de cosa juzgada, formulada por la parte demandada en su contestación de demanda, en presentación de fecha 19 de enero 2022, a folio 16.
- IV. Que **se rechazan** las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, formulada por la parte demandada en su contestación de demanda, en presentación de fecha 19 de enero 2022, a folio 16.
- V. Que **se acoge** la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, interpuesta por doña **Maryori Yassel España Mansilla**, doña **Yarissa Allin España Mansilla**, y don **Vicente Manuel España Mansilla**, en contra de la empresa **Blue Shell S.A**, representada legalmente por don Juan Cristóbal Salinas Larraín, todos ya individualizados; sólo en cuanto se condena a la demandada a pagar una suma única de indemnización por daño moral equivalente a \$30.000.000, a favor de los demandantes.
- VI. Que la suma indemnizatoria deberá ser pagada debidamente reajustada, por la variación que experimente el IPC, entre el último día del mes anterior a que la sentencia quede firme y el último día del mes anterior a la fecha de su pago efectivo.

Asimismo, el monto indemnizatorio devengará intereses corrientes para operaciones no reajustables, entre la fecha en que este fallo quede firme y la fecha del pago efectivo de la indemnización.

- VII. Que **se rechaza** la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, interpuesta por **Maryori Yassel España Mansilla**, **Yarissa Allin España Mansilla**, y **Vicente Manuel España Mansilla**, en contra de la empresa **Blue Shell S.A**, representada legalmente por don Juan Cristóbal Salinas Larraín, todos ya individualizados; en cuanto al lucro cesante solicitado, por lo razonado en los motivos quincuagésimo primero y siguientes del fallo.
- VIII. Que cada parte pagará sus costas.

**Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.**

Pronunciada por don **Jorge Andrés Ibarrola Ávila**, Juez Suplente del Juzgado de Letras de Castro.



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art.  
162 del C.P.C. en **Castro, veintiséis de Noviembre de dos mil veintidós**

